Constitucionalización de la sociedad civil y política ambiental¹

*José Ángel Méndez Rivera*²

*Francisco Castellón Sosa*³

Introducción

De las cinco tendencias de análisis de la sociedad civil mexicana (Romero, 2012): la tradición freiriana, la tradición neo-marxista, la tradición veracruzana, la perspectiva desde el capital social, y la perspectiva filantrópica, hemos asumido la tradición neomarxista de Gramsci con el humanismo de Maritain, para el estudio de la constitucionalización de la sociedad civil, tomando como referente la política ambiental en el enfoque de política pública.

Se trata de una contribución a la política pública ambiental, a partir de la incorporación de la categoría de sociedad civil como uno de sus pilares, conforme a la interpretación de Jean Cohen y Andrew Arato (2000) en su obra *Sociedad civil y teoría política*, aun cuando el paradigma de la sociedad civil para dichos autores está cargado de fuertes dosis utópicas, pues sólo puede ser formulado con base en los movimientos sociales generadores de la acción colectiva, ya que únicamente a través de ésta se logra incidir en la

¹ Este capítulo se escribe con apoyo del estudiante Luis Ángel Pérez de la Torre, como parte del proyecto 8638 de fortalecimiento de cuerpos académicos, con clave UCOL-CA 72, con el título: “La construcción de la constitucionalización de la sociedad civil, como sustento de derechos de tercera generación: democracia, medio ambiente y cultura educativa”.

² Profesor Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.

³ Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.

realidad sociopolítica de nuestro tiempo. Sin embargo, consideran que a pesar de que prácticamente en el mundo occidental se ha instaurado la democracia liberal, la sociedad civil sigue siendo considerada una categoría políticamente débil, cuando no carente de valor, por ser una categoría enunciada al comienzo de la filosofía política moderna, pretendiendo explicar las disfunciones de nuestras complejas sociedades. Sin embargo, en la teoría de la democracia liberal no está lo suficientemente clara.

Cohen y Arato (2000) especifican que la sociedad civil no es todo lo que se encuentra fuera del Estado o de la economía de mercado. La sociedad civil se refiere a las estructuras de la socialización, asociación y formas de comunicación organizadas del mundo de la vida, como lo pensaba Habermas, en la medida en que han sido institucionalizadas o se encuentran en proceso de serlo (García, 2001). Su papel político no es la conquista del poder político administrativo ni del mercado en general, sino la influencia que pueda ejercer sobre estos, a través de su capacidad de organización democrática y de discusión pública.

La sociedad civil puede entonces estar dotada de poder para transformar a las instituciones, las leyes y la política pública ambiental, alcanzando un estado de equilibrio en tal política; de esta forma, la sociedad civil podría ser constitucionalizada, esto es elevada a rango constitucional, al lado del régimen político de los partidos y de los poderes del Estado, y sí, con naturaleza política, pero con funciones diversas al Estado y a los partidos. Así, una sociedad civil constitucionalizada podría volver a legitimar a los actores partidistas y estatales, hoy tan deslegitimados.

Adicionalmente, para entender la sociedad civil y siguiendo la línea de Touraine y Khosrokhavar (2002), la definición del sujeto social se hace también necesaria para comprender los alcances no sólo de estructuras de la sociedad civil, sino también de los movimientos sociales, y es que el sujeto social es más profundo todavía que las estructuras, pues abarca los movimientos culturales en sus más diversas manifestaciones, que incluyen lo religioso, pues si el actor político del Estado atiende lo temporal inevitablemente como aparato económico, entonces, en virtud del sujeto social, las preocupaciones de la sociedad civil atienden a lo trascendente en

sentido histórico cultural, más cuando pensamos en la trascendencia de la humanidad, a partir de este planeta tierra, que exige de una política ambiental eficaz y de una sociedad civil eficiente.

Estado y política ambiental como política pública

Surgimiento de la dimensión ambiental como política pública

La mitad del siglo pasado gestó un cambio impostergable dentro de la dinámica social, política y jurídica del mundo, al poner en escrutinio la forma en que por siglos el imaginario social occidental había forjado la idea de una naturaleza entendida como objeto, donde por una parte el ser humano se fragmentaba con respecto a ésta y, a la vez, la reducía como un objeto susceptible de explotación y propiedad (Gudynas, 2010). La germinación de esta idea dio como consecuencia la instauración de toda una forma de vivir, que acompañó a la humanidad durante diversas etapas de su existencia. El desarrollo y el progreso fue entendido por un largo periodo de tiempo en una ecuación donde la naturaleza no parecía figurar.

En el siglo XVIII y XIX, a través del paso del tiempo y con ello la materialización de las consecuencias de degradación ambiental que la industrialización presupuso, se movilizó a ciertos sectores sociales, curiosamente de los países desarrollados, para intentar poner freno a la pérdida del mundo natural. Frente a estas exigencias, en el terreno Estatal surgieron políticas de tipo preservacionistas y conservacionistas: las primeras concernientes a la instauración de sitios protegidos como zonas libres de intervención humana, tal es el caso de Yellowstone en Estados Unidos, en 1872, y la conservación científica como la idea de un uso más racional de la naturaleza, a través de nuevas formas científicas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales (Ulloa, 2002).

En la primera mitad del siglo XX, las causas que venían buscando los movimientos ambientalistas se vieron detenidas por el contexto político, social y económico que azotaron la época. En los años sesenta, los estragos ambientales que los procesos de industrialización generaron eran más intensos y directos en cuanto a su afectación al ser humano. Así, a la par de otros movimientos sociales pacifistas, una nueva ola del movimiento ambientalista co-

bró fuerza, ahora integrando también entre sus bases un sentido de justicia social, sumándole a ello el espacio científico desde donde varias voces se alzaban, evidenciando las fallas del modelo de desarrollo y proponiendo alternativas para la construcción de un nuevo futuro (Ulloa, 2002, pp. 211-212). El imaginario social cambió y con ello algunas bases que ya habían sido dadas por la modernidad, por lo que fue necesario el cambio desde el espacio jurídico y político.

Entendido el cuidado del medio ambiente como una responsabilidad global de cooperación internacional, y atendiendo a los informes técnicos sobre la necesidad de basar el futuro a través de un modelo de desarrollo que no comprometiera al ambiente, en 1972, en la ciudad de Estocolmo, se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, siendo la ONU (s.f.) la encargada del consenso entre naciones para poder establecer las bases de lo que constituirían al derecho internacional ambiental. Esto no sólo constituyó una tradición importante en el ámbito internacional que paulatinamente iría desarrollándose a lo largo de los años, sino también una nueva era dentro de los marcos jurídicos y prioridades de las agendas políticas de los Estados miembros.

Estado, política pública y medio ambiente

Frente a los nuevos contextos que implica la dimensión ambiental, el Estado asume la responsabilidad de dirección e implementación de la gestión ambiental, entendiendo por su objetivo el de ordenar un aprovechamiento sostenible del ambiente como un presupuesto clave para la transición al paradigma del desarrollo sostenible, a través de acciones, políticas, principios e instituciones (Andaluz, 2006). Se allega de la política ambiental como elemento articulador de sus otros dos pilares: la legislación y la administración ambiental.

Las políticas públicas, para Rainer Godau (1985, p. 49), son el resultado práctico de la interacción entre diferentes intereses sociales compuestos por la experiencia histórica de una sociedad reflejada a través de un estilo de desarrollo determinado. La política pública al no manifestarse como una imposición del Estado, sino como la compilación de esos intereses señalados por Godau, cede ante la expansión y fortalecimiento de una creciente idea en la sociedad, a través de la cual se busca exhibir la importancia del medio ambiente.

Entonces, las cuestiones ambientales transitan a convertirse en política ambiental cuando el Estado reconoce un claro interés público por el aseguramiento de un medio ambiente sano y, así, moviliza su aparato gubernamental con el fin de conseguir este objetivo. No obstante, la realización de estrategias dependerá de los modelos de desarrollo que asumen quienes manejan el Estado.

La política ambiental resulta ser una serie de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público, con el fin de asegurar el medio ambiente y la sustentabilidad, comprendiendo la consagración normativa, la planificación de actividades de corto, mediano y largo plazo, la definición de estrategias y políticas sectoriales, actos de gobierno, y la asignación de recursos (Godau, 1985, p. 389). Aunque, si bien su creación recae en el Estado, la sociedad civil y el sector privado deben asumir un papel de colaboradores a lo largo de su planificación, dirección e implementación.

A la par, Andaluz (2006, pp. 306 y 391) reconoce dos conceptos adicionales a política ambiental: la política ambiental de Estado y la política ambiental de gobierno. La primera entendida como aquella que adopta un país a través del consenso de los representantes políticos y actores sociales, para ser ejecutada por quien ejerce el poder, comprendiendo declaraciones y mandatos de contenido ambiental establecidos en normas e instrumentos de política tanto nacionales como internacionales; y la segunda, que refiere al análisis del actuar concreto de quienes ejercen el poder político, por lo que implica escrutar planes, programas y estrategias, presupuesto asignado para su ejecución, el peso político de la estructura diseñada, así como los actos del gobierno.

En México la relevancia dada por el Estado a los problemas ambientales llegó hasta los años setenta, en sintonía con las movilizaciones globales, gracias a sectores de la sociedad civil y del espacio académico, que exigían la acción gubernamental en temas ambientales. Aunque en un primer momento fue visto bajo un enfoque sanitario, poco a poco su entendimiento se fue ampliando como un área autónoma e imperativamente transversal; sin embargo, dos características generan, hasta el momento, contención: su calidad como país megadiverso y su calidad como país en vías de desarrollo y economía emergente (Guevara, 2005).

Ya instaurada una ley de marco ambiental, rectora de la política ambiental nacional para el México posterior a Río de Janeiro 1992, dicha política ambiental integra la visión del desarrollo sustentable, articulando objetivos sociales, económicos y ambientales, elevándose a rango de ministerio hasta 1995, en lo que quizá sea la decisión más significativa dentro de la consolidación institucional de la política ambiental mexicana, además del proceso de consolidación e integración normativa que sucedió en el periodo de 1995 a 2000 (Guevara, 2005) y las subsecuentes, en el sexenio de 2006 a 2012 en materia de cambio climático, así como la reforma constitucional en 2012 del artículo cuarto constitucional sobre el derecho humano a un medio ambiente sano.

Dos de los mayores retos que enfrenta la política ambiental y que no son exclusivos de México, tienen que ver con la transversalidad, y la asignación de recursos. El primero de ellos considerando que bajo este principio se da la congruencia a las bases de la política ambiental de Estado, asumiendo las cuestiones ambientales no como asuntos sectoriales, sino como asuntos generales y rectores de otros tipos de políticas no propiamente ambientales, contra las que pudiera tener conflicto, como es el caso en el sector económico o turístico; y en el tema de presupuesto, toda vez que es justamente en él donde se refleja el compromiso y grado de seriedad de quien asume la dirección del Estado en los asuntos ambientales, entendiendo que sin dinero las políticas públicas no son más que postulados sin ninguna operatividad.

Sociedad civil como actor participativo frente a políticas públicas ambientales

Sociedad civil y medio ambiente

La sociedad civil ha sido fundamental para construir el nuevo paradigma ambiental, especialmente respecto a la influencia sobre una nueva conceptualización de la naturaleza que permeó incluso en las bases del Estado, obligando a replantear aspectos profundos de su política y situando inevitablemente a los asuntos ambientales como asuntos de interés público.

No es sorpresa que las movilizaciones reflejo de las críticas al modelo de desarrollo en un primer momento se gestaran desde el terreno de la sociedad civil. El Estado había sido artífice e impulsor de un modelo cuyas consecuencias parecían verse ajenas para el sector que monopolizaba al poder, tanto político como económico; sin embargo y al mismo tiempo, las consecuencias de la degradación golpeaban cada vez con más intensidad a otros sectores invisibilizados hasta el momento por el mismo Estado.

Aunque, primeramente, las demandas surgían como exigencia frente a problemas concretos, poco a poco los movimientos fueron madurando hasta constituirse como verdaderas movilizaciones ambientalistas, con ideales revolucionarios que cuestionaban las bases de los modelos políticos e incluso la racionalidad moderna en cuanto a su idea de subordinación, conquista y dominio de la naturaleza; sin embargo, esta tarea al resultar compleja y materialmente imposible para ser asumida únicamente por un sector, se optó por involucrar a las políticas estatales y acciones gubernamentales (Ulloa, 2002, pp. 213-214).

Así pues, los procesos de cambio que han venido instaurándose desde la sociedad civil constituyen una lucha legítima de reivindicación del poder político. La organización de la sociedad civil no sólo formuló actores clave dentro de la conformación de estructuras organizacionales formales, sino que trascendió en un sentido histórico al instaurar sujetos sociales que dieron sustento a todo un movimiento social sin precedentes.

Los movimientos sociales son el fruto de contradicciones que arrojan sujetos sociales. Según Touraine y Khosrokhavar (2002), para que los sujetos sociales sean verdaderos actores colectivos necesitan cierta inscripción en la historia, una visión de la totalidad del campo dentro del cual se inscriben, una definición clara del adversario y, finalmente, una organización. Los movimientos sociales que producen sujetos sociales nacen de la percepción de objetivos como metas de acción, con roles coyunturales para su reproducción social. El movimiento social y el sujeto social producen una permanente dialéctica entre metas y organización, cuyo peligro potencial siempre presente es la posibilidad de que la lógica de organización, se imponga por sobre las exigencias de los

objetivos buscados. Los movimientos sociales que se definen como pertenecientes a la sociedad civil tienen que precisar que se trata de la sociedad civil de abajo, recuperando así el concepto de Antonio Gramsci que la considera como el lugar de las luchas sociales (Houtart, 2006).

Para Alberto Olvera (2002), el fortalecimiento de la sociedad civil dependerá de tres cosas: 1) desarrollo de asociaciones voluntarias, 2) la existencia de una esfera pública donde puedan discutirse los asuntos de interés colectivo, y 3) la disponibilidad de medios institucionales para el establecimiento de un puente comunicacional entre sociedad civil, la esfera pública, instancias político-representativas y aparato del Estado. Desde el área de lo ambiental, pareciera no haber más problemas respecto a las dos primeras situaciones; sin embargo, las cosas se complican al analizar la tercera, pues, pese a haber instancias jurídicamente establecidas, hay veces que la voluntad política se vuelve el principal obstáculo para volver eficaz dicho diálogo.

La participación pública en los asuntos ambientales

Los sistemas democráticos han cambiado paulatinamente a la luz de nuevos contextos. Cada vez es más evidente una desilusión frente a la estructura democrática electoral que pareciera no representar cabalmente los intereses de los gobernados, siendo precisamente los representantes políticos a través de su imposibilidad de responder, y a veces coadyuvar, frente a serios problemas estructurales que aquejan a la sociedad, que han puesto en duda la eficacia de la democracia representativa.

Desde un espacio distinto representado por la propia ciudadanía se evidencia una transformación necesaria motivada por un hartazgo ante los medios de participación tradicionales, insuficientes hasta el momento para representar cabalmente su voz, y cuya propuesta consiste en la necesidad de abrir espacios de participación directa o semidirecta que complementen y mejoren los mecanismos ya establecidos, libres de intervención partidarias (Morán, 2015).

Al respecto, Evelina Dagnino et al. (2006, p. 15) precisan lo siguiente:

[...] la teoría democrática convencional no admite el conflicto social dentro de su propio marco y restringe el concepto de política a la lucha por el poder entendido como el logro de la autorización y la representación a través de las elecciones. En contraste, la democracia participativa tiene otra visión cuyo fundamento es la ampliación del concepto de política a través de la participación ciudadana y de la deliberación en los espacios públicos de lo que se deriva una noción de democracia como un sistema articulado de instancia de intervención de los ciudadanos en las decisiones que les conciernen y en la vigilancia del ejercicio del gobierno.

Así pues, la participación pública revitaliza los procesos democráticos permitiendo al ciudadano no sólo ser partícipe de la vida pública y toma de decisiones, sino también un observador y escrutador de la función pública. El medio ambiente se caracteriza por ser un tema de naturaleza pública, en el que todos —en su proporcional medida— nos podemos ver afectados por las consecuencias de su degradación. Desde el amparo del derecho, se le proporciona una titularidad colectiva que responde a una necesidad de dependencia de éste, por lo que reparte obligaciones comunes de cuidado que se expanden más allá de la esfera estatal, hasta cubrir a todo aquél en cuanto pudiera infligir repercusiones sobre el medio ambiente. El derecho a participar directamente en la decisión de los asuntos ambientales nace precisamente bajo este supuesto, de entender el derecho a un medio ambiente sano como un derecho colectivo.

Así, a través de la participación, la ciudadanía encuentra un espacio mediante el cual ella misma contribuye a garantizar un medio ambiente sano, en la medida que exige y demanda el respeto por vías institucionales de su derecho, precisamente, a un medio ambiente sano, y vigila y denuncia el actuar que no persiga estos objetivos.

La participación de la sociedad civil en la política ambiental

Ahora bien, hasta el momento hemos hablado sobre la participación como derecho del ciudadano en la toma de decisiones am-

bientales; sin embargo, habremos de precisar que el hablar de la participación a través de la sociedad civil trasciende su enfoque más allá de la mirada de un derecho individual.

La sociedad civil reúne los intereses de determinados sujetos que han decidido encontrar en la colectividad un espacio de poder para influir sobre las estructuras estatales; así, desde lo ambiental, exigen garantizar un medio ambiente sano a través del cuidado y conservación de nuestro entorno, de visibilizar las acciones incoherentes que no persiguen los objetivos necesarios para garantizar un futuro común, pero también buscan germinar ideales, principios y valores al resto de los individuos; buscan transformar no sólo la estructura gubernamental, sino las bases de la sociedad misma.

La importancia de que la sociedad civil participe dentro de la política ambiental se constituye por su papel de vigilancia y escrutinio, al ser observadores y evaluadores del cumplimiento de los objetivos y las acciones del Estado, en aras de garantizar un medio ambiente sano; así como de su papel activo, pues es a través de estos que se regionalizan los problemas ambientales y sus indisolubles exigencias y necesidades que generan en ciertos sectores de la población, dando así congruencia y efectividad a las medidas implementadas para hacerles frente.

México enfrenta un gran reto que consiste en el establecimiento genuino de una plataforma legal que permita la participación de la sociedad civil, asegurando que sus manifestaciones realmente tengan un sentido y vinculatoriedad; de lo contrario, los actores políticos seguirán reduciéndolo a una formalidad legal que puede ser, o no ser, considerada según su capricho.

Politización de la sociedad civil frente a políticas públicas ambientales

Hacia la politización humanista de la sociedad civil

Este párrafo se desarrolla desde el estudio de Hernández Samper (2001) sobre el concepto de sociedad civil a partir de las aportaciones de dos pensadores en la filosofía política: Antonio Gramsci y Jacques Maritain. En el caso de Gramsci, desde el marxismo con

base humanista, y en el caso de Maritain, desde el personalismo Neotomista. Lo que nos permite justificar la politización de la sociedad civil como sistema frente a políticas ambientales participativas, pues resulta necesario organizar una sociedad civil que sea capaz de producir liderazgos que reemplacen a la decadente clase política de hoy, sustentada en el fenómeno de la partidocracia, que ha acabado por sustituir a la democracia.

Ciertamente, como lo afirma Hernández Samper (2001, p. 57), “fue Gramsci uno de los primeros en comprender la dimensión esencialmente cultural y de fenómeno de conciencia de la sociedad civil, y sus procesos de encauzamiento de los hábitos sociales e individuales”, ya que fue dicho autor uno de los que más contribuyó a que “se pudiera considerar humanismo a lo que se llama genéricamente marxismo”. Surge así lo que se puede considerar como la antropología marxista, que completa el análisis sociológico de la realidad con categorías que son ampliamente usadas por las diversas corrientes de pensamiento que se basan en los principios de Marx, pero que tienen puntos de vinculación importantes con otras teorías no marxistas (Hernández Samper, 2001).

En Gramsci:

[...] la sociedad civil tiene un contenido humanístico de alto valor que nunca deja de crear interrogantes, pero del que no hay dudas sobre su existencia. El marxista italiano no se basa en el uso de la estructura económica para explicarse la razón de ser de los fenómenos de la sociedad civil, sino que busca la respuesta a estas interrogantes en el seno de una superestructura esencialmente cultural y no sólo política (Hernández Samper, 2001, p. 58).

Así, la cultura como camino del cambio social (revolucionario), es uno de los elementos esenciales del discurso gramsciano. De esta manera, Gramsci sustituye el concepto de dictadura leninista por el de hegemonía y lo entiende como un proceso cultural y civilizatorio, arribando a la conclusión de que el enfoque gramsciano es un socialismo cultural y civilizatorio de contenido humanista (Hernández Samper, 2001).

De tal manera, se encuentran tres elementos constitutivos en Gramsci dentro de su filosofía política: la perspectiva de transformación social desde la sociedad civil organizada; la necesidad de una revolución ética, por sobre lo económico y político; y un nuevo tipo de Estado, sobre nuevas bases culturales desde la sociedad civil.

En el mismo contexto de la sociedad civil, tenemos a Jacques Maritain (Hernández Samper, 2001) considerado también filósofo de la sociedad civil, quien se apoya en el discurso politológico para construir su idea de democracia ideal en política, fundamentándola en los Derechos Humanos. Maritain desconfía sistemáticamente del Estado moderno, ya que considera, que desde esta perspectiva la realización del orden político disminuye al hombre, pues lo toma como medio político, coincidiendo con Gramsci, en la necesidad de buscar la refundación del plano estatal desde una sociedad civil renovada.

Maritain se propone superar la oposición tradicional en la filosofía política moderna entre sociedad civil y Estado, plantea un nuevo tipo de conceptualización instrumental del Estado que denomina de “racionalización moral”, para enfrentarlo al de “racionalización técnica”, que él concibe como una herramienta de las manos invisibles del capital para esclavizar al hombre, para enajenarlo y apartarlo de sus fines, que serían su propia elevación o humanización. La propuesta de Maritain lleva a plantearse una perspectiva antitotalitaria del régimen estatal, tal como Gramsci lo buscaba, en la construcción de hegemonía en la sociedad civil. La confianza excesiva en el aparato estatal hace que se pierda el sentido y fin de la vida política, “el bien común, la dignidad de la persona humana, y el sentido del amor fraternal” (Hernández Samper, 2001, p. 61).

La urgencia de un nuevo proyecto humanista mediante una revolución ética, que deconstruya la racionalidad técnica la razón instrumental, dirían Adorno y Horkheimer, que es posiblemente la principal fuerza del capitalismo en contra de la sociedad civil (Hernández Samper, 2001) y ajena a todo vínculo de fraternidad que supere el estado de dominación del poder económico politizado sobre la sociedad civil. Este es el punto de convergencia entre Gramsci y Maritain, como nuevo tipo de cultura políticamente humanista.

La sociedad civil humanista frente a políticas públicas ambientales

Una de las teorías contemporáneas en el llamado resurgimiento de la sociedad civil es la establecida por Jean Cohen y Andrew Arato (2000). Su reconstrucción del concepto es realizada a partir de la distinción analítica que hace Habermas (León, 2015) de la lógica del sistema político y del mundo de la vida. El concepto de mundo de vida es referido a las tradiciones implícitamente conocidas y aceptadas socialmente, que, al ser usadas por los individuos, se integran al lenguaje y la cultura, que puede ser ambiental y que produce sujetos sociales, que se integran a su vez a la sociedad civil organizada, en torno a cuestiones ambientales.

Así pues, el mundo de la vida produce sujetos sociales que, a su vez, pueden generar movimientos sociales de índole ambiental y que pueden luego también integrarse a la sociedad civil organizada, a partir de demandas de políticas públicas protectoras del medio ambiente. Por ello, un aspecto de importancia para el desarrollo de la sociedad civil organizada o institucionalizada, es la estructuración del mundo de la vida que, como parte del proceso de modernización, se da a través del surgimiento de instituciones especializadas de la sociedad civil, en la reproducción de tradiciones en torno al cuidado de la naturaleza (León, 2015).

Dichas organizaciones institucionalizadas aseguran en la sociedad civil la transmisión de la cultura ambiental y la socialización en un contexto del mundo de la vida modernizado, con la condición de que la existencia de la sociedad civil sea la garantía jurídica de la reproducción de las esferas en la forma de conjunto de políticas ambientales. Así, las estructuras del mundo de la vida modernizada no se limitan a la política moderna y a la economía; su lógica puede penetrar la reproducción también de instituciones de una sociedad civil ambiental, estabilizada con base en nuevas formas jurídicas de carácter constitucional, que constituyan el soporte de una sociedad civil políticamente empoderada, al nivel del régimen de partidos y al nivel del Estado, sin que sea estatal, como no lo son los partidos políticos.

Sociedad civil como actor político constitucionalizado en políticas públicas ambientales

Los derechos traducidos en políticas públicas ambientales, como base del humanismo cultural propuesto por Maritain y Gramsci, y que constituyen el terreno de la sociedad civil, nos proporcionan la ruta para la constitucionalización de dicha sociedad civil, desde tres presupuestos:

- La sociedad civil representa genuinamente el humanismo y, por lo tanto, a la persona humana;
- Los partidos políticos como parte del régimen político suelen representar a los intereses políticos de los ciudadanos, más que a la persona humana.
- El Estado y sus estructuras gubernamentales, por razón de su propia supervivencia, suelen representar más a los actores económicos.

Si queremos modernizar la sociedad civil, a partir de los anteriores presupuestos, necesitamos darle rango constitucional como parte del sistema político al lado del Estado y del régimen político de partidos, como sociedad civil organizada con un poder capaz de imponer políticas públicas ambientales y de cualquier otra materia que sea de interés relevante; asimismo, para que el Estado se haga responsable de su racionalización y ejecución, ponderando la ideología de los partidos representados en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, sin perjuicio de que la sociedad civil posea mecanismos constitucionales ante el poder judicial, para hacer valer sus facultades en políticas públicas cuando haya omisiones.

Sólo así se estructurará una sociedad civil modernizada (desarrollada), en un marco de una institucionalización que la hace no subordinada al Estado y no condicionada clientelariamente por el régimen de partidos, siendo una sociedad civil compuesta por personas organizadas capaces de desarrollar a plenitud su condición y vocación humana, usando el mecanismo de las políticas públicas, ya ambientales o ya de naturaleza tal que contribuyan al desarrollo de la persona humana, sin perjuicio de su desarrollo como ciudadano, pero antes que ciudadano, persona, pues cuando la persona humana se reduce sólo al papel de ciudadano, acaba siendo sólo

instrumento ideológico del régimen de partidos y mero sujeto económico del estado

La constitucionalización de la sociedad civil implica la aceptación del Estado benefactor, ya directo o ya subsidiario, delimitando mediante la racionalización de las políticas públicas, la ideologización hegemónica de los partidos y la economización del Estado por parte del mercado. Así, la sociedad civil adquiere una finalidad diferente: deja de ser un mero sujeto social generador de influencia y se convierte en actor político con poder constitucionalizado.

Con esta propuesta de constitucionalización de la sociedad civil, se reconoce a la sociedad civil como una esfera de interacción entre régimen político de partidos y el Estado como aparato económico; compuesta dicha sociedad civil ante todo por la esfera cultural: la familia, la esfera religiosa, las asociaciones sociales autónomas no subsidiadas por el Estado (en una sociedad civil constitucionalizada se subsidian las políticas públicas pero no las organizaciones), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública (Cohen y Arato, 2000, p. 8).

Conclusiones

La política ambiental resulta ser una serie de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público, con el fin de asegurar el medio ambiente y la sustentabilidad, comprendiendo la consagración normativa, la planificación de actividades de corto, mediano y largo plazo, la definición de políticas públicas, actos de gobierno, y la asignación de recursos (Andaluz, 2006, p. 389). Aunque, si bien su creación recae en el Estado, la sociedad civil debe asumir un papel de actor político en la planificación e implementación de la política pública ambiental. La importancia de que la sociedad civil participe dentro de la política ambiental reside en que debe transitar de su papel de vigilancia y escrutinio al de impulsor directo de políticas públicas, en aras de garantizar un medio ambiente sano.

Para ello, urge un nuevo proyecto humanista de sociedad civil mediante una revolución ética, que deconstruya la racionalidad técnico instrumental de lo político, que es la principal fuerza del

capitalismo en contra de la sociedad civil y de la propia naturaleza medioambiental, a fin de que la sociedad civil recupere vínculos de fraternidad colectiva, que superen el estado de dominación del poder económico politizado sobre la sociedad civil y el medio ambiente. Este es el punto de convergencia entre Gramsci y Maritain, como nuevo tipo de cultura políticamente humanista, en una nueva sociedad civil.

Si pensamos en una nueva sociedad civil empoderada y políticamente humanista, necesitamos darle rango constitucional como parte del sistema político al lado del Estado y del régimen político de partidos, como sociedad civil organizada con un poder capaz de imponer políticas pública ambientales y de cualquier otra materia que sea de interés relevante, para que el Estado se haga responsable de su racionalización y ejecución, ponderando la ideología de los partidos representados en el poder legislativo y en el poder ejecutivo; lo anterior, sin perjuicio de que la sociedad civil posea mecanismos constitucionales ante el poder judicial para hacer valer sus facultades en políticas públicas cuando haya omisiones, pues si el Estado atiende lo temporal, inevitablemente como aparato económico, entonces en virtud del sujeto social que se vuelve actor social, la sociedad civil atiende a lo trascendente en sentido cultural, más cuando pensamos en la trascendencia de la humanidad, a partir de este planeta tierra que exige una política ambiental eficaz de una sociedad civil eficiente.

Referencias

- Andaluz Westreicher, C. (2006). *Manual de Derecho Ambiental*. Proterra.
- Cohen, J. L. y Arato, A. (2000). *Sociedad civil y teoría política*. Fondo de Cultura Económica.
- Dagnino, E., Olvera, A. y Panfichi, A. (2006). *Para otra lectura de la disputa por la construcción de la democracia en América Latina*. Fondo de Cultura Económica, CIESAS y Universidad Veracruzana.
- García, V. (2001). Reseña de Sociedad civil y teoría política de Jean Cohen y Andrew Arato. *Signos Filosóficos*, 5.
- Godau Schucking, R. (1985). La protección ambiental en México: sobre la conformación de una política pública. *Estudios Sociológicos*, 3(7), pp. 47-84. <https://www.jstor.org/stable/40419796>
- Gudynas, E. (2010). La senda biocéntrica: valores intrínsecos, derechos de la naturaleza y justicia ecológica. *Tabula Rasa*, 13. <http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n13/n13a03.pdf>
- Guevara Sangines, A. (2005). Política ambiental en México: génesis, desarrollo y perspectivas. *ICE Revista de Economía*, 821. http://www.acading.org.ve/info/comunicacion/pubdocs/DOCS_AMBIENTE/politica_ambiental_mexico.pdf
- Hernández Samper, G. (2001). La Sociedad civil en Gramsci y Maritain, apuntes sobre una convergencia. *Universidad de La Habana*, 281.
- Houtart, F. (2006). Los movimientos sociales y la construcción de un nuevo sujeto histórico. En A. Borom Atillo, J. Amadeo y S. González. (Comps.) *La teoría marxista hoy, problemas y perspectivas*. CLACSO.
- León Pérez, A. La sociedad civil en México entre dos regímenes: logros y limitaciones. En E. Cuna, M. González y J. Santiago (Coords.). *México entre siglos. Contexto, balance y agenda* (pp. 47-70). <https://cede.izt.uam.mx/wp-content/uploads/2022/11/UTF-8-México-entre-siglos.pdf>
- Morán Torres, E. F. (2015). El derecho ambiental y la participación ciudadana: hacia un vital punto de encuentro en México y el mundo. *Anuario da Faculdade de Direito da Universidade da Coruña*, 19.
- Olvera Rivera, A. J. (2002). Democracia y Sociedad Civil en México: lecciones y tarea. *Comercio Exterior*, 52(5).
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (s.f.). *Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 5 a 16 de junio de 1972, Estocolmo*. <https://www.un.org/es/conferences/environment/stockholm1972>
- Romero, M. E. (2012). La Sociedad civil, una revisión de los enfoques teóricos. *Revista Miriada*, 4(8), pp. 145-165. <https://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada/article/view/1418>

- Touraine, A. y Khosrokhavar, F. (2002). *A la búsqueda de sí mismo: diálogo sobre el sujeto social*. Editorial Paidós.
- Ulloa, A. (2002). Pensando Verde: el surgimiento y desarrollo de la conciencia ambiental global. En G. Palacio y A. Ullóa (Edits.) *Repensando la Naturaleza, encuentros y desencuentros disciplinarios en torno a lo ambiental*.